



La guerra contra las drogas:

Socavando el desarrollo y la seguridad internacional, incrementando el conflicto

La guerra contra las drogas: ¿Estamos pagando un precio demasiado alto?

La “guerra contra las drogas” se ha librado en todo el mundo durante 50 años sin llegar a prevenir la tendencia de largo plazo hacia un incremento de la oferta y consumo de drogas. Más allá de este fracaso, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) también ha identificado muchas graves “consecuencias negativas no intencionales” de la guerra contra las drogas. Éstas resultan no del propio consumo de la droga sino de la elección de un enfoque punitivo basado en la aplicación de la ley que, por su naturaleza, coloca el control del tráfico de drogas en manos del crimen organizado, al mismo tiempo que criminaliza a muchos consumidores. En el proceso, este fenómeno está socavando el desarrollo y la seguridad, y alimentando el conflicto.

Introducción

Los intentos por controlar la producción y la oferta mundial de drogas adoptaron su forma actual a partir de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, dada a conocer en 1961. Aunque fue promovido con fines de salud pública, este acuerdo internacional tomó un

COUNT THE COSTS

50 YEARS OF THE WAR ON DRUGS

Contenido

La guerra contra las drogas: ¿Estamos pagando un precio demasiado alto?

- Introducción 1
- Los costos para los países en desarrollo:
 - 1. Alimentando el conflicto y la violencia 3
 - 2. Incrementando la corrupción y socavando la gobernabilidad 4
 - 3. Enormes costos económicos y de oportunidad . . . 5
 - 4. Criminalizando la pobreza 6
 - 5. Incrementando la deforestación y contaminación 7
 - 6. Prevalencia del VIH y otros impactos en la salud. 8
 - 7. Socavando los derechos humanos, promoviendo la discriminación 8
- ¿Existen beneficios? 9
- “Lo que no sabemos sigue haciéndonos daño?” 10
- Conclusión 11

“¿Dónde están las voces de la comunidad de desarrollo? La prohibición está llenando de dinero los bolsillos de criminales y grupos armados. Las ganancias del tráfico ilegal no son sólo empleadas para comprar armas, también compran jefes de policía y jueces. La corrupción alcanza niveles extraordinarios y, a medida que ésta crece, las obligaciones democráticas, el peldaño necesario para que las personas pobres accedan a sus derechos y los defiendan, son progresivamente erosionadas... Las familias atrapadas en esta pesadilla son víctima de una ‘guerra contra las drogas’ inviable.”

Jonathan Glennie

Investigador de ODI, ex Presidente del Programa de Christian Aid en Colombia
2010

enfoque prohibicionista, basado en la acción de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas para imponer la ley, con la intención de eliminar la producción y oferta de drogas y de castigar a los consumidores.

Sin embargo, prohibir una mercancía para la cual existe alta demanda inevitablemente crea oportunidades de lucro para especuladores criminales, impulsando la producción, oferta y consumo hacia una economía ilícita paralela.

Los cárteles de drogas y los traficantes pueden estar más seguros de contar con un suministro barato y confiable de cultivos de drogas (hoja de coca, amapola o cannabis), si pueden mantener a raya a funcionarios del gobierno, y si los agricultores cuentan con pocas alternativas ante la producción de drogas. Como resultado de ello, los traficantes prefieren operar en áreas de producción y tránsito donde exista escasa infraestructura económica o gobernabilidad. Así, éstos se enfocan en regiones geográficamente remotas y en Estados ya débiles o colapsados, y luego protegen y expanden sus intereses recurriendo a la violencia, la intimidación y la corrupción.

La desestabilización ulterior de una región a través de estos mecanismos, desalienta la inversión, restringe las actividades de las ONG y agencias del gobierno, y desvía la escasa asistencia al desarrollo y otros recursos hacia acciones para la aplicación de la ley.

Los efectos negativos invariablemente recaen con más

fuerza sobre las personas más pobres y marginalizadas, incluyendo a poblaciones indígenas y minorías étnicas, los jóvenes y las mujeres. Las mismas consecuencias corrosivas históricamente vistas en regiones productoras de drogas, son replicadas ahora crecientemente en regiones de transbordo de drogas, en la medida en que los traficantes trasladan estas sustancias a través del Caribe, América Central, Asia Central y África Occidental.

Evidencia recogida en todo el mundo muestra que, en el mejor de los casos, las acciones para la aplicación de la ley desplazan a los mercados ilícitos y las rutas de tránsito hacia nuevas áreas; y, en el peor escenario, incrementan de hecho la violencia y el daño que se proponen impedir. En resumen, el inevitable resultado de que los mercados de drogas estén controlados por especuladores criminales organizados es mantener a las regiones vulnerables de producción o tránsito de drogas en un subdesarrollo de múltiples dimensiones, donde los problemas existentes son exacerbados, y la gobernabilidad socavada aún más.

Los costos para los países en desarrollo

Los impactos negativos de la guerra contra las drogas en el desarrollo y la seguridad internacional que se plantean más abajo se yuxtaponen y coinciden con los problemas que enfrentan los países ricos. Para obtener mayor información, consultar: www.countthecosts.org

1. Alimentando el conflicto y la violencia

Hay una serie de maneras en que la guerra contra las drogas está contribuyendo al conflicto y la violencia y que surgen principalmente de entregar el control de un lucrativo mercado ilegal en manos de empresarios criminales adaptables y despiadados. En ausencia de cualquier regulación formal del mercado, la violencia se convierte en su instrumento regulador predeterminado.

Para asegurar y expandir su negocio, los cárteles equipan ejércitos y milicias privados – los cuales, en muchos casos, superan en armamento a las fuerzas estatales del orden. Las redes del crimen organizado también pueden financiar a grupos separatistas e insurgentes o fusionarse con ellos, en la medida en la que las drogas ilícitas se han convertido en un recurso clave de financiamiento para varios grupos terroristas operando a nivel doméstico e internacional.

La corrupción, combinada con la intimidación y la propia violencia contra políticos, los cuerpos policiales, el poder judicial, las fuerzas armadas y los funcionarios de aduanas, socavan aún más la gobernabilidad y promueven el conflicto.

Las intervenciones policiales y militares pueden involucrar en sí mismas una considerable violencia. Por ejemplo, bajo la consigna de la ofensiva de la “guerra contra las drogas” lanzada por el gobierno tailandés en 2003, se produjeron 2,819 asesinatos extrajudiciales.⁽¹⁾ Las intervenciones del Estado también pueden precipitar una espiral de violencia en la cual los cárteles luchan con una ferocidad creciente tanto contra las fuerzas del gobierno, como contra otras bandas por el control del tráfico, mientras la acción del

“El sistema de control y su aplicación han tenido varias consecuencias no intencionales:

- *Un enorme mercado negro criminal... No hay escasez de criminales que compitan por capturar a zarpazos una porción del mercado en el cual no son infrecuentes incrementos que multiplican el precio por cien, desde la producción hasta la venta al menudeo.*
- *La salud pública fue desplazada a un segundo plano.*
- *El ‘efecto globo’, porque apretar (con controles más estrictos) un lugar produce... un incremento en otro lugar.*”

Antonio María Costa
Director Ejecutivo, Oficina de las Naciones
Unidas Contra las Drogas y el Delito
2008

Estado trastoca las estructuras establecidas del mercado ilícito, tal como ocurre claramente en México en años recientes.

En el largo plazo, la violencia endémica puede traumatizar a las poblaciones por generaciones, en particular al promover una cultura más profunda de violencia entre las personas jóvenes.

México: Un estudio de caso en violencia y corrupción

México es la ruta de tránsito clave para la cocaína desde la región hasta América del Norte, y un proveedor principal de cannabis para el mercado estadounidense. Aunque México tiene una larga historia de violencia interna, ésta se encontraba en declive hasta el año 2006, cuando el Presidente Calderón hizo sentir todo el peso de la acción de la Policía y las Fuerzas Armadas mexicanas sobre los cárteles criminales de la droga.

Lejos de acabar con la violencia, redoblar la guerra contra las drogas conllevó una dramática escalada de ésta. En la medida en que los cárteles devolvieron el golpe a las fuerzas del gobierno, se enfrentaron entre sí para capturar el control de las áreas donde las bandas rivales estaban debilitadas e incrementaron sus esfuerzos por corromper a las autoridades. Desde el año 2006, han habido más de 36,000 muertes relacionadas a la guerra contra las drogas, de las cuales 1,300 son menores de edad y 4,000 mujeres.

“La policía y las fuerzas armadas en México son conocidas por estar contaminadas por los sobornos multimillonarios en dólares procedentes del negocio del narcotráfico transnacional. Aunque el problema no es tan difundido entre los militares como entre la policía, muchos consideran que el fenómeno ha alcanzado el estatus de una amenaza a la seguridad nacional.”

Transparencia Internacional ⁽²⁾



La guerra contra las drogas en México: más de 36,000 muertes

2. Incrementando la corrupción y socavando la gobernabilidad

La guerra contra las drogas, y el enorme mercado criminal que ésta ha creado, han conllevado a la corrupción de instituciones y personas a todo nivel en los países afectados. Ello es resultado de los ingentes fondos en manos de quienes ocupan los más altos niveles en este negocio ilícito, de su disposición a recurrir a la violencia para obligar a los reticentes a aceptar sobornos (tal como lo expresan en México: “plomo o plata”), y de la pobreza y frágil gobernabilidad de las regiones donde ocurre la acción.

“La corrupción no sólo reduce el ingreso neto de los pobres sino que también quiebra programas referidos a sus necesidades básicas, desde salubridad hasta educación y atención de salud. Resulta en la distribución inadecuada de recursos, en detrimento de los programas de reducción de la pobreza... El logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se encuentra en riesgo a menos que se haga frente a la corrupción...” Transparencia Internacional ⁽³⁾

Tal como lo ha descrito la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC):

“La magnitud de los fondos en control de los criminales plantea amenazas especiales para los gobiernos, particularmente en países en desarrollo, donde los mercados de seguridad doméstica y de capital son demasiado pequeños para absorber tales fondos sin convertirse rápidamente en dependientes de ellos. Es difícil mantener con un sistema democrático funcional cuando los cárteles de la droga cuentan con los recursos para protección, apoyo político o votos en todos los niveles del gobierno y de la sociedad. En sistemas donde un miembro del poder legislativo o judicial, percibiendo apenas un ingreso modesto, puede ganar fácilmente el equivalente a varios meses de salario de manos de un traficante por tomar una decisión ‘favorable’, los peligros de la corrupción resultan obvios.”⁽⁴⁾

En última instancia, la combinación de violencia y corrupción afecta seriamente la gobernabilidad y el desarrollo de muchos países en todo el mundo.

Colombia– un estudio de caso en conflicto e inseguridad

Desde la década de 1970, Colombia ha estado en el epicentro de la producción ilícita de cocaína. Las vastas ganancias así generadas han alimentado una terrible expansión del ya problemático conflicto armado interno entre el gobierno y movimientos subversivos, destacando entre ellos las FARC, y han impulsado la corrupción a todos los niveles entre la policía, el poder judicial y los líderes políticos.

- Hacia el año 2010, el conflicto armado y los abusos de derechos humanos relacionados a éste en Colombia habían desplazado a más de 4.9 millones de personas.⁽⁵⁾
- El financiamiento de los EE.UU. para operaciones anti-drogas se ha militarizado cada vez más, y en buena cuenta es indistinguible de la contrainsurgencia. Los EE.UU. también han impulsado la erradicación aérea de cultivos, la cual ha tenido escaso impacto sobre la producción de la hoja de coca pero graves impactos sobre la salud humana, las culturas indígenas y el medio ambiente.
- Según la organización Transparencia Internacional, el subdesarrollo y la anomia han empeorado en Colombia como resultado del tráfico de drogas, reportando que: “Una encuesta del Banco Mundial dada a conocer en febrero de “2002 descubrió que se pagaban sobornos en 50 por ciento de todos los contratos estatales. Otro informe del Banco Mundial estima que el costo de la corrupción en Colombia es de US \$2.6 mil millones anualmente, el equivalente al 60 por ciento de la deuda del país.”⁽⁶⁾

“Miles de millones de dólares han sido gastados en la guerra contra las drogas, y ello sólo ha producido colosales organizaciones criminales. Cuando has volcado dinero a raudales durante un siglo, de seguro ha llegado la hora que concluyas que algo no está funcionando.”

Dr E.K. Rodrigo
Ex Zar Antidrogas de Sri Lanka
2005

3. Enormes costos económicos y de oportunidad

Las consecuencias negativas para un país de depender económicamente de la exportación de un único producto son bien conocidas para mercancías legítimas como el petróleo. Similares problemas pueden surgir también de exportaciones ilícitas, con la amenaza potencial adicional para el desarrollo de la falta de impuestos y el aislamiento de la producción de drogas ilícitas respecto a actividades económicas y sociales legales. El problema relacionado, sobre lo que supone este cambio para la mano de obra y el capital que operan en el sector criminal no regulado, también puede socavar el desarrollo y crecimiento económico de largo plazo.

En la medida en que la economía y las instituciones de un país se vuelven progresivamente más criminalizadas, otros negocios ilegales que operan bajo la propiedad o protección de los cárteles criminales pueden obtener tratamiento preferencial, haciendo más difícil la competencia para empresas legales, y forzándolas a soportar un peso mayor en cuanto a tributación y regulación.

Mientras más se desestabiliza la región, aumentan también otros aspectos como:

- Desaliento a la inversión por parte de empresas locales o extranjeras
- Restricción de las actividades de organizaciones de desarrollo y otras entidades que, de otro modo, prestarían apoyo para el desarrollo económico y humano
- Desvío de asistencia y otros recursos para acciones en desarrollo, hacia la aplicación de la ley por parte de los cuerpos policiales y de las fuerzas armadas (reduciendo la fiscalización e incrementando la posibilidad de que ocurran abusos a los derechos humanos)

A nivel mundial, se gastan más de \$100 millones de dólares al año en librar la guerra contra las drogas – aproximadamente lo mismo que el total invertido por los países ricos en asistencia al exterior.⁽⁷⁾ Los EE.UU. y otros países han desviado la asistencia al desarrollo, retirándola de donde ésta sería más efectiva y difuminándola hacia gastos militares para sus aliados en la guerra contra las drogas – los más destacados de los cuales están en América Latina.

Aunque cualquier enfoque referido a las drogas requiere de financiamiento, existe un enorme costo de oportunidad en esta escala de gasto para una política que ni siquiera está cumpliendo sus metas previstas. Como resultado, muchas de las áreas más pobres de los países afectados están empobreciéndose aún más a través del desperdicio de dinero que podría haberse invertido de manera más estratégica, desde educación hasta infraestructura.

4. Criminalizando la pobreza

La producción de cultivos de drogas se ubica generalmente en poblaciones social y económicamente marginalizadas, quienes no se enriquecen debido a su participación en este negocio. Los agricultores reciben apenas cerca del 1% del ingreso de las drogas ilícitas en el mundo (la mayor parte de las ganancias restantes las reciben los traficantes). Quienes cultivan, a menudo tienen pequeñas parcelas, enfrentan precios de mercado volátiles para sus productos no relacionados a drogas, pagan altos costos de transporte al mercado desde áreas aisladas, o requerirían elevados

El problema con el “desarrollo alternativo”

Una piedra angular de la respuesta internacional al comercio ilícito de drogas ha sido el “desarrollo alternativo” (DA) para estimular a los productores de cultivos de drogas a orientarse hacia otros cultivos como el trigo. Existen significativos problemas con muchos proyectos de DA pero, cuando se le implementa apropiadamente, puede ayudar a los agricultores dedicados a cultivos ilícitos a hacer la transición hacia medios de vida no relacionados a las drogas.

Aún más, al igual que los esfuerzos igual que los esfuerzos de erradicación, el DA no tiene impacto en la producción global de cultivos de drogas en el largo plazo. Cualquier impacto localizado sólo desplaza la producción – y los problemas que acompañan a ésta – hacia otra región o país. De modo que no hay un beneficio cabal para el desarrollo.

niveles de inversión para iniciar cultivos alternativos pero tienen un acceso limitado al crédito. Por ejemplo, en Myanmar y la República Popular Democrática de Laos, se estima que las familias que cultivan drogas ganan apenas \$200 dólares en efectivo al año, y sus cultivos crecen en áreas donde prevalecen deficientes condiciones de salud y analfabetismo, donde la infraestructura física y social es insignificante, y las poblaciones se encuentran marginalizadas y discriminadas por el grupo étnico dominante.⁽⁸⁾

De modo que la incursión de agricultores pobres en la producción de cultivos de drogas es resultado de la falta de opciones; una “migración hacia la ilegalidad”, impulsada por la “necesidad, no la codicia”, tal como lo describe un informe del Instituto Transnacional.⁽⁹⁾

La producción de cultivos de drogas y el tráfico de estos productos son facilitados cuando el control del gobierno, así como las acciones para la aplicación de la ley por parte de militares o policías, son mínimos o pueden ser mantenidos a raya. De modo que los criminales que controlan el

tráfico ilícito naturalmente prefieren que los entornos de producción y tránsito tengan una infraestructura económica y gubernamental limitada. En consecuencia, los grupos criminales buscan, crean, mantienen y control tales entornos a través del uso sistemático de la violencia y la corrupción. Ello, a su vez, afianza los problemas que forzan a los agricultores pobres a incurrir en la producción de cultivos de hoja de coca en primer lugar – atrapándolos en un círculo vicioso fuera de su control.

Las respuestas para el control de drogas en estas áreas usualmente asumen la forma de erradicación de cultivos, desarrollo alternativo y criminalización de los productores. Los resultados, en términos de reducción sostenible de la pobreza, han sido principalmente negativos. Las prohibiciones relacionadas al opio y los programas de erradicación en el sudeste asiático, Colombia y Afganistán han estado vinculados al incremento de la pobreza entre los agricultores, menor acceso a la salud y la educación, mayor endeudamiento, desplazamiento a gran escala, acelerada deforestación y descontento social. También han resultado en un incremento del número de mujeres jóvenes pertenecientes a minorías étnicas que ingresan al comercio sexual, a menudo a través del tráfico humano.

Las medidas para el control de drogas también pueden impulsar secciones de la población en apoyo de grupos insurgentes, o a buscar ser empleados por las bandas criminales, socavando aún más la seguridad y la gobernabilidad y, con ello, las posibilidades de desarrollo.

5. Incremento la deforestación y contaminación

Uno de los costos frecuentemente ignorados de la guerra contra las drogas es su impacto negativo sobre el medio ambiente – principalmente como resultado de la fumigación aérea de los cultivos de drogas en áreas ecológicamente sensibles como los Andes y la cuenca Amazónica.

La erradicación química no sólo causa deforestación focalizada, sino que tiene un efecto multiplicador de devastación porque los productores de drogas simplemente deforestan nuevas áreas para su cultivo – el llamado “efecto

Afganistán – un caso de inseguridad

Afganistán enfrenta muchos retos para el desarrollo y tiene una larga historia de involucramiento en el tráfico de opio. Actualmente, suministra más del 90% del opio/heroína de origen ilícito en el mundo, pese a que la erradicación de la amapola fue una de las metas declaradas de la invasión de la coalición en 2001. De hecho, la producción ha crecido dramáticamente, y actualmente domina la economía y alimenta una corrupción sin precedentes, al mismo tiempo que financia la insurgencia, el conflicto y los grupos terroristas – a nivel nacional e internacional.

- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que el 52% del PBI del país, ascendente a \$2.7 millones de dólares al año, es generado por el tráfico de drogas, de los cuales, entre \$200 y \$400 millones de dólares fueron a manos de insurgentes talibanes y caudillos en 2006 y 2007.
- Se cree que los funcionarios del gobierno afgano están involucrados en por lo menos el 70 por ciento de las operaciones de tráfico de opio, y por lo menos 13 de los gobernadores provinciales pasados o actuales están directamente involucrados en el tráfico de droga.
- La Encuesta de UNODC sobre Opio en Afganistán de diciembre de 2010 muestra las realidades económicas que enfrentan los agricultores afganos, al declarar: “A los precios actuales, plantar amapola es seis veces más rentable que cosechar trigo.”⁽¹⁰⁾

globo”. Este problema se agrava porque a menudo la fumigación aérea se realiza en áreas protegidas ubicadas en reservas nacionales donde esta actividad está prohibida.

Durante las últimas dos décadas hemos presenciado el traslado del grueso del cultivo de coca, desde el Perú y Bolivia hacia Colombia y, luego, de región en región dentro de Colombia; o, más recientemente, de regreso al Perú y Bolivia. En un ejemplo de tal futilidad, la Oficina de Políticas Nacionales para el Control de Drogas de los EE.UU. admitió

que, a pesar de la fumigación aérea sin precedentes de más de 1,300 km² de cultivos de coca en Colombia durante 2004, el área total ocupada por cultivos de la hoja había permanecido “estadísticamente inalterada”.

La producción ilícita no regulada también está asociada con contaminación localizada, en la medida en que productos químicos tóxicos empleados en el procesamiento rudimentario de la coca y el opio son arrojados al medio ambiente y vías fluviales locales.

También se han planteado preocupaciones respecto a los mico-herbicidas (hongos asesinos) creados en laboratorios para atacar las plantas de amapola y coca; los científicos temen que estos hongos puedan afectar los cultivos de alimentos, arrasar con especies enteras de plantas y dañar gravemente los ecosistemas.

6. Prevalencia del VIH y otros impactos en la salud

La guerra contra las drogas resulta en una serie de daños relacionados a la salud que tienen un impacto en el desarrollo. En primer lugar, los niveles de consumo de drogas y los efectos nocivos asociados directamente a la salud tienden a elevarse en los países y zonas vulnerables y marginalizados empleados para producir y transportar drogas, en tanto se incrementa rápidamente la disponibilidad de las sustancias, incluyendo el pago con drogas a trabajadores.

En segundo lugar, criminalizar a los consumidores estimula las conductas riesgosas, como compartir jeringas, e impide medidas para ayudar a aquellas personas que viven con el virus a no seguirlo transmitiendo. Como resultado de ello, en muchos países en vías de desarrollo se observan altos índices de prevalencia de VIH, hepatitis B y C entre usuarios de drogas inyectadas. Aproximadamente una décima parte de los nuevos casos de VIH son resultado de jeringas compartidas entre consumidores de drogas, y esta cifra crece a casi una tercera parte de casos nuevos en países fuera del África sub-sahariana, y cerca de la mitad o más en ciertas regiones, incluyendo muchas ex-repúblicas soviéticas.

“*Los países desarrollados – los principales consumidores – han impuesto políticas nocivas a los países productores de drogas. Estas políticas han tenido consecuencias funestas... para el desarrollo económico y la estabilidad política de los países productores. La estrategia de la ‘guerra contra las drogas’ no ha tenido un impacto significativo sobre sus metas de incrementar el precio de las drogas en las calles, ni de reducir el consumo. En lugar de ello... la prohibición creó incentivos económicos para que los traficantes surjan y prosperen; la erradicación de cultivos en la región andina ayudó a incrementar la productividad de los cultivos restantes; y la lucha contra el comercio ilegal de heroína en Afganistán afectó mayormente a los campesinos pobres, y benefició a los talibanes.*”

Fernando Henrique Cardoso
34to Presidente de Brasil

7. Socavando los derechos humanos, promoviendo la discriminación

La ONU tiene como tarea la promoción de los derechos humanos, así como la supervisión del régimen internacional para el control de drogas. Sin embargo, en la práctica, los abusos a los derechos humanos cometidos en nombre de la guerra contra las drogas son alarmantemente comunes.

Así, diversos países cometen actos de violencia contra su

población para castigar delitos relacionados a las drogas e incluyendo castigos corporales, ejecuciones y asesinatos extrajudiciales. Además, en directa oposición a la legislación internacional, más de treinta países mantienen la pena de muerte para castigar estos delitos, produciendo en conjunto más de 1,000 ejecuciones anualmente. En este sentido, China continúa siendo el Estado más alarmante al ‘celebrar’ el Día Internacional contra las Drogas establecido por la ONU con ejecuciones públicas masivas.⁽¹¹⁾

El uso de castigos desproporcionados para delitos menores relacionados con drogas abruma los sistemas de justicia penal, alimentando el hacinamiento de las prisiones y los consiguientes daños asociados de salud y derechos humanos. Las personas que consumen o cultivan drogas son también blanco fácil de maltratos por parte de los cuerpos policiales, y están sujetos a violencia, tortura o extorsión bajo amenaza de detención, o a los efectos de la abstinencia de drogas en el caso de consumidores dependientes, para coaccionarlos a brindar testimonios incriminatorios.

La criminalización del tratamiento y la reducción de daños también se encuentra muy difundida. La terapia de sustitución de opiáceos (más comúnmente empleando metadona, pero también buprenorfina) sigue siendo ilegal en muchos países, como es el caso de Rusia. Igualmente, la legislación penal que prohíbe la provisión (y posesión) de jeringas/aguja crea un clima de temor entre consumidores de drogas, alejándolos de los centros de prevención del VIH y otros servicios de salud que salvan vidas y, por el contrario, estimulando conductas de alto riesgo. Las personas que usan drogas son discriminadas en cuanto al acceso a la atención de salud y tratamientos anti-retrovirales y contra la hepatitis C.

En China y el sudeste asiático, las personas arrestadas por posesión y consumo de drogas ilícitas a menudo están sujetos a detención arbitraria sin mediar juicio, bajo la forma de “tratamiento” forzoso u obligatorio en instalaciones donde abusos adicionales a los derechos humanos son moneda corriente y por períodos que van de unos pocos meses a varios años.⁽¹²⁾ Sólo en China, se estima que el número de personas detenidas en tales centros de “tratamiento” se eleva a 500,000.⁽¹³⁾

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) incluye el “acceso a drogas esenciales y asequibles en países en desarrollo”. Sin embargo, año tras año, decenas de millones de personas en países del sur global padecen dolores moderados o severos debido a restricciones legales y políticas relacionadas a medicinas esenciales como la morfina. La OMS ha también enumerado restricciones con respecto a la efedrina y ergometrina como obstáculos para alcanzar el ODM 5, que consiste en reducir en tres cuartas partes la tasa de mortalidad materna. Las acciones para erradicación de cultivos, así como los costos ambientales ya mencionados, pueden tener un impacto sobre los derechos básicos. Por su parte, la fumigación con productos químicos produce problemas de salud. Ejemplo de ello es el glifosato rociado por aviones estadounidenses sobre cultivos de hoja de coca, ocasionando problemas gastrointestinales, fiebre, dolores de cabeza, náuseas, resfríos y vómitos. Aún más, los cultivos de plantas alimenticias se convierten en víctimas directas, obligando en ocasiones a pueblos enteros a abandonar sus hogares y eliminando la fuente principal de ingreso de agricultores con, naturalmente, consecuencias económico-sociales. Los riesgos de la erradicación forzosa son igualmente significativos en Afganistán, donde un número estimado de dos millones de agricultores desubsistencia viven de los cultivos de drogas.

¿Existen beneficios?

La afirmación de que la guerra contra las drogas puede reducir o eliminar la producción y disponibilidad de estas sustancias simplemente no se sustenta en la experiencia del último medio siglo. La producción y oferta de cultivos clave de drogas y productos relacionados han superado el ritmo de la demanda, con una tendencia de largo plazo a la reducción de precios e incremento de consumo y disponibilidad de las sustancias. Tal como ya se ha señalado, los “éxitos” localizados de las acciones para la aplicación de la ley simplemente trasladan los problemas de un lugar a otro.

Los principales beneficiarios de la guerra contra las drogas son quienes la usan para sus fines políticos, ya sea por

razones políticas populistas o para justificar intervenciones militares, así como las fuerzas armadas y proveedores de equipos militares/policiales, y los criminales que terminan controlando el negocio.

Sin embargo, la producción y el tráfico representan una actividad económica real. Para ciertas poblaciones y personas con opciones limitadas, la producción de drogas o la participación en la cadena criminal de suministro de sustancias ofrece una de las pocas fuentes de ingreso disponibles, aunque ésta venga acompañada de riesgos. Algunas de estas ganancias ilegales también benefician las economías locales cuando el dinero es gastado en mercados legales.

Estos beneficios son ampliamente superados por los costos sociales y económicos de la guerra contra las drogas, pero cualquier cambio a las políticas para el control de drogas debe considerar los impactos sobre el desarrollo, especialmente para la mayoría de las personas involucradas en la economía ilícita y quienes no necesariamente coinciden con el estereotipo de “multimillonario barón de la droga”.⁽¹⁴⁾

“Lo que no sabemos nos sigue haciendo daño”

No se ha realizado esfuerzo genuino alguno por parte de una entidad internacional o gobierno nacional para evaluar adecuadamente las consecuencias negativas no intencionales del enfoque actual sobre las drogas, menos aún para explorar de manera significativa alternativas a éste.

Dados los atroces impactos de la guerra contra las drogas sobre el desarrollo internacional, los derechos humanos, el medio ambiente y muchos otros sectores, ello es tanto escandaloso como inaceptable. Tal como lo expresó claramente la Academia Nacional de Ciencias de los EE.UU. en 2001 en su reporte “Informando la Política de los EE.UU. sobre Drogas Ilegales; Lo Que No Sabemos Nos Sigue Haciendo Daño”:

“Es inconcebible que este país continúe llevando a cabo una política pública de esta magnitud y costo sin contar con alguna manera de saber si está logrando el resultado deseado, y en qué medida. Nuestro comité recomienda

Guinea Bissau – una amenaza en expansión para la seguridad

La demanda de cocaína en Europa, combinada con el incremento de acciones policiales en el Caribe, han simplemente trasladado las rutas de tránsito a África Occidental, debido al llamado *el efecto globo*. Guinea Bissau, ya afligida por una ya afligida por una débil gobernabilidad e infraestructura policial y una pobreza endémica, se ha visto particularmente afectada, con graves consecuencias para uno de los países más subdesarrollados del planeta.

En 2006, el PIB total de Guinea-Bissau era de apenas €304 millones de dólares, el equivalente de seis toneladas de cocaína vendidas en Europa al por mayor. UNODC estima que aproximadamente 40 toneladas de la cocaína que se consume en Europa atraviesa África Occidental. Además, la disparidad en términos de riqueza entre las organizaciones del narcotráfico y las autoridades, ha facilitado la infiltración y el soborno de la reducida infraestructura estatal existente. Las investigaciones muestran la extensa participación de los cuerpos policiales, las fuerzas armadas, ministros de gobierno y la familia del Presidente en el negocio de la cocaína, cuya incursión en el país también ha desencadenado abusos en el consumo de cocaína y *crack*.⁽¹⁵⁾

La guerra contra las drogas ha convertido a Guinea Bissau de un frágil Estado a un narco-Estado en apenas cinco años. Otros países de África Occidental se encuentran también bajo esta amenaza, todos ellos Estados frágiles con potencial de ser empleados como países productores o de tránsito.

encarecidamente que se emprenda un sustancial, nuevo y enérgico esfuerzo de investigación para examinar los diversos aspectos del control sobre las drogas, de modo que la toma de decisiones sobre estos temas pueda recibir un mejor apoyo de evidencias factuales y realistas.”⁽¹⁶⁾

El comité identificó como áreas clave de preocupación las “*políticas internacionales para reducir el suministro clave de drogas mediante la erradicación de cultivos y el desbaratamiento del tráfico de drogas*”, haciendo específicamente un llamado a realizar “*investigaciones adicionales sobre el grado en que los productores y traficantes frustran las acciones para aplicación de la ley en un área geográfica mediante el traslado de sus rutas de contrabando y producción a otros lugares*”, y que “*se requieren investigaciones para determinar cómo deben medirse los efectos de las actividades para reducción de la demanda.*”

Hay dificultades para evaluar los impactos de medidas para el control de drogas. Sin embargo, el principal desafío reside en la naturaleza emotiva y altamente politizada del debate alrededor de las drogas, la cual ha llevado a que la guerra contra las drogas sea en gran medida inmune al escrutinio.

Lo que es peor, los daños causados por la propia guerra contra las drogas se funden con los producidos por el consumo de las sustancias, para reforzar el discurso sobre la aparente “amenaza de las drogas” que luego es usada para justificar la aplicación de aún mayores medidas de la misma fallida estrategia.



Socavando Estados ya frágiles

Conclusión

Muchos de los países en vías de desarrollo enfrentan grandes desafíos, incluyendo falta de recursos, deficiente gobernabilidad, conflicto y corrupción. Lo último que necesitan es empeorar todos estos problemas mediante una guerra contra las drogas fútil y contraproducente. Estas políticas no sólo suponen un desastre para los países productores y de tránsito. A nivel global, las consecuencias no intencionales de la guerra contra las drogas son:

- amenaza contra la salud pública, difusión de enfermedades y causa de muerte
- socavamiento de los derechos humanos
- promoción del estigma y la discriminación
- creación de delitos y enriquecimiento de criminales
- desperdicio de miles de millones de recursos financieros en una inefectiva aplicación de la ley

La guerra contra las drogas es una opción de políticas. Existen otras opciones que deberían, como mínimo, ser debatidas y exploradas, utilizando la mejor evidencia y análisis disponible. Pero si hay algo en que concuerdan los expertos, es que el desarrollo es casi imposible de lograr en una zona de guerra.

Todos compartimos las mismas metas – queremos un mundo más seguro, saludable y justo. Es tiempo que todos los sectores cuyo trabajo es afectado por nuestro enfoque hacia las drogas, en especial a los interesados en el desarrollo internacional, hagamos un llamado a los gobiernos y la ONU para realizar un adecuado *Cálculo de los Costos de la Guerra contra las Drogas*, y explorar las alternativas.

Referencias

Jonathan Glennie

“Las drogas son un tema de desarrollo”, The Guardian, octubre de 2010.

Antonio Maria Costa

“Haciendo que el control de drogas ‘sirva a sus fines’”: Consolidando una década de UNGASS, UNODC, 2008.

Dr E.K. Rodrigo

Hablemos de una revolución, Bermuda Sun, diciembre de 2005.

Ex Presidente Cardoso de Brasil

Prefacio a “Testigos Inocentes: Países en desarrollo y la Guerra contra las Drogas” Banco Mundial, 2010.

¹ “La mayoría de los muertos en la guerra contra las las drogas no están involucrados en drogas”, The Nation, 27 de noviembre, 2007. Una investigación de un comité del gobierno descubrió en 2007 que 1,400 de los asesinatos no correspondían a traficantes de drogas o no se podía identificar una razón para sus muertes (Human Rights Watch, “Tailandia: Proceso contra Policía Antidrogas Identificada en Abusos”, 7 de febrero, 2008).

² Gutiérrez, M., “Informe Mundial Sobre Corrupción 2001: América Central, el Caribe y México”, Transparencia Internacional, 2001 p. 158.

³ Transparencia Internacional, “Prioridades Mundiales: Pobreza y Desarrollo”, http://www.transparency.org/global_priorities/poverty, consultado en febrero de 2011.

⁴ United Nations International Drug Control Program, “Technical Series Report #6: Economic and Social Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking”, New York, NY: UNDCP, 1998, p. 39.

⁵ Centro para Monitoreo de Desplazamiento Interno, “Panorama General de Colombia: Respuesta del gobierno mejora pero aún no satisface necesidades de creciente población desplazada internamente”, diciembre de 2010.

⁶ Herrera E. W. y Cortés, N. U., “Informe de Corrupción Mundial 2003: Sudamérica”, Transparencia Internacional, 2003, p. 108.

⁷ OECD, “Asistencia para el Desarrollo: Asistencia al desarrollo oficial neta”, 2009, http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-aid-net-official-development-assistance-oda-2009_20743866-2009-table1;jsessionid=np08e8ln884k.delta.

⁸ Mansfield, D., “Desarrollo en un contexto de drogas: Un enfoque estratégico al desarrollo alternativo”, 2006, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.

“La Guerra contra las Drogas:

Calcula los Costos” es un proyecto

de colaboración global apoyado por organizaciones y expertos de todos los sectores que sufren el impacto de nuestro enfoque hacia las drogas, incluyendo: desarrollo internacional y seguridad, derechos humanos, salud, discriminación y estigma, delincuencia, medio ambiente y economía. **Para mayor información, incluyendo cómo puede usted participar, visite: www.countthecosts.org, o envíe un correo electrónico a:**

info@countthecosts.org

⁹ Jelsma, M., “Círculo Vicioso: Las Guerras Química y Biológicas contra las Drogas hemical and Biological War on Drugs”, Instituto Transnacional, 2001, p. 26.

¹⁰ UNODC, “Encuesta sobre opio en Afganistán”, diciembre de 2010, p. 5.

¹¹ Asociación Internacional para la Reducción de Daños, “Pena de Muerte para Delitos de Drogas: Visión Panorámica 2010”, 2010.

¹² Amon J., “Por qué los vietnamitas no quieren internarse en rehabilitación”, Human Rights Watch, mayo de 2010.

¹³ Human Rights Watch, “Donde la Oscuridad No Conoce Límites. Encarcelamiento, Maltrato y Trabajos Forzados como Rehabilitación por Drogas en China”, 2010. (Citando: Informe ONUSIDA 2009, “SIDA en China: información de antecedentes sobre la epidemia y la respuesta”, documento inédito en archivo de Human Rights Watch, mayo 2009, p. 8.)

¹⁴ Para una discusión adicional, consultar: Fundación Transform Drug Policy, “Después de la Guerra Contra las Drogas: Una Propuesta para la Regulación”, 2009, Sección 4.5, “Impactos sociales, políticos y económicos más amplios”.

¹⁵ UNODC, “Tráfico de cocaína en África Occidental: La amenaza a la estabilidad y el desarrollo (con énfasis especial en Guinea-Bissau), 2007. http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/west_africa_cocaine_report_2007-12_en.pdf

¹⁶ Nacional de Ciencias de los EE.UU., “Lo que no sabemos nos sigue haciendo daño”, 2001. Nota de prensa e informe completo: <http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=10021>